

**A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SOCIEDAD DIGITAL  
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DIGITALIZACIÓN E  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

, en nombre y representación, como Director General del CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS EGDPI, **CEDRO**, [www.cedro.org](http://www.cedro.org), entidad de gestión colectiva de autores y editores de libros, periódicos, revistas, partituras musicales y resto obras susceptible de ser impresas, con domicilio en Madrid, CP 28014 calle Alcalá nº 26 (entrada por Cedaceros nº 1), piso 3º y dirección de correo electrónico , y , ante esa subdirección General y como mejor proceda, **dice**,

**PRIMERO.** Que esta parte ha tenido conocimiento de que el pasado mes de junio se inició el proceso de elaboración de la denominada “Carta de Derechos Digitales” y de que el trabajo concluido por un grupo de expertos en la materia se ha sometido a consulta pública, cuyo vencimiento es el 20 de diciembre de 2020.

**SEGUNDO.** Que CEDRO, por medio del presente escrito, y dentro del plazo conferido al efecto, formula las siguientes

**MANIFESTACIONES**

**PRIMERA: SOBRE LA NATURALEZA DEL TEXTO QUE SE SOMETE A CONSULTA**

En primer lugar, esta parte comparte la necesidad de abordar el estudio de la adecuación de los derechos de los ciudadanos al entorno digital. Cada vez con mayor intensidad nos relacionamos a través de las redes electrónicas y es necesario adaptar los derechos y deberes de los ciudadanos a este nuevo entorno.

Sin embargo, consideramos que la estructura y contenido de este documento, así como su denominación, podrían generar confusión en sus destinatarios.

Partiendo de que se trata de un documento carente de carácter vinculante, consideramos que quizá debería adoptar la forma de “informe de un grupo de expertos”, “recomendaciones” o “conclusiones de un determinado grupo de trabajo”, con indicación expresa del concreto organismo que ha encargado su elaboración.

La denominación “carta” junto a una estructura propia de las normas vinculantes podrían dar una apariencia de naturaleza normativa, de la que este texto carece. Este documento, al denominarse “Carta de derechos digitales” podría ser identificado por el usuario medio con documentos como la conocida Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea o la Declaración Universal de Derechos Humanos. El ciudadano medio asume que las cartas emanan del poder legislativo y que las mismas tienen una naturaleza vinculante, por ello, consideramos que existe un posible riesgo de que el público confunda la naturaleza de este documento. Esta posible confusión, en nuestra opinión, se manifestaría, por ejemplo, en el pretendido reconocimiento de determinados derechos. Vemos que en el apartado III se *“reconoce el derecho a la propia identidad en el entorno digital”*, en el apartado VII *“se reconoce el derecho a la herencia digital”*, en el apartado VIII se *“reconoce el derecho a la igualdad en los entornos digitales”*, en el apartado XV se *“reconoce el derecho a la libertad de acceso a la educación y a la libertad de creación de centros que presten sus servicios a través de entornos digitales”*, en el apartado XVI se reconocen varios derechos de los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas. Por último, se *“reconoce el derecho a la libertad de creación en el entorno digital”* en el apartado XXII.

Este documento no puede reconocer derechos (ya previstos en la legislación) o crear derechos inexistentes en la legislación vigente, como el denominado “derecho al pesudonimato”. Como ya se ha dicho, entendemos que, si se desea reconocer nuevos derechos o situaciones, la fórmula idónea, en su caso, sería su propuesta de inserción en una determinada Ley, como efectúan los informes de expertos en cualquier materia

Además, entendemos que se debería definir de forma más concreta quiénes son los destinatarios de este documento, ya que, tal y como hemos indicado, parecería que en el mismo se pretenden establecer directamente derechos y obligaciones para diferentes agentes.

Por último, hay que mencionar que ya la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales recoge un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución.

Quizá por ello algunas menciones del documento que se somete a consulta pública resulten innecesarias por haber sido el tema en cuestión ya regulado en esa norma jurídica

## **SEGUNDA: SOBRE EL DERECHO AL PSEUDONIMATO**

La Carta incluye un nuevo derecho en el artículo IV, al que se denomina “*derecho al pseudonimato*”.

Podría suceder que este nuevo derecho, si se reconociera de forma plana y sin mecanismos de equilibrio, pudiera facilitar el anonimato en el desarrollo de las conductas más lesivas (infracciones a los derechos de propiedad intelectual e industrial, incitación al odio, comercialización de productos prohibidos, pornografía infantil, estafas, infracciones contra el derecho al honor, acoso...) que se producen en las redes, dado que el anonimato deriva en muchas ocasiones en la impunidad de estas conductas.

Por otra parte, debemos recordar que los internautas ya cuentan con el derecho al olvido previsto en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

## **TERCERA: SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES EN EL ENTORNO DIGITAL**

Los efectos buscados en el apartado dedicado a la protección de menores en el entorno digital se reforzarían aún más si se desarrolla de forma más contundente la necesaria formación e información que deben recibir los menores. De esta forma, a través de la formación se evita que los menores, colectivo especialmente vulnerable y merecedor de la máxima protección, puedan cometer comportamientos ilícitos en las redes, bien iniciados por ellos mismos, bien por terceros o, incluso, ser ellos las víctimas de actividades ilegales en ese entorno virtual.

Asimismo, nuestros menores son el público más vulnerable ante la divulgación de noticias falsas, bulos, contenido obsoleto o de escasa calidad, contenido creado, en muchas



ocasiones, por usuarios y que no ha sido sometido a un control o verificación por parte de un tercero que se haga responsable del mismo.

Resulta imprescindible dotar a los menores de información sobre la realidad, funcionamiento ventajas y riesgos de la red ofreciéndoles pautas de actuación segura y unas reglas mínimas para que desarrollen el espíritu crítico en todo lo relacionado con su acceso a noticias a través de esa vía.

Solo a través de la erradicación de bulos, noticias falsas, contenido obsoleto, material que infringe derechos de propiedad intelectual o piratería y a través de una buena formación e información, los usuarios van a poder tener la tranquilidad de estar actuando de forma legal y accediendo a contenido legítimo, veraz, verificado y de calidad.

#### **CUARTA: SOBRE EL DERECHO A LA NEUTRALIDAD DE INTERNET**

La Carta limita la exigencia de neutralidad a los proveedores de servicios de internet quienes deben proporcionar una oferta transparente y sin discriminación por motivos económicos o técnicos.

Esa misma neutralidad debe ser tenida en cuenta no solo para el acceso sino también en relación con actividades y comportamientos que se desarrollan en la red como, por ejemplo, los relacionados con el tratamiento de datos.

#### **QUINTA: SOBRE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN**

El apartado XIII del texto sometido a consulta hace referencia a los derechos de libertad de expresión y de libertad de información.

En el punto 1 se indica que *“todos tienen derecho a las libertades de expresión e información en entornos digitales en los términos previstos por la Constitución”*. Estos derechos pueden ser invocados en numerosas ocasiones para tratar de justificar conductas que vulneran derechos ajenos, por ejemplo, en la emisión de injurias, calumnias, mensajes de odio o en supuestos de clara infracción a los derechos de Propiedad Intelectual.

Nuestra Constitución indica (art. 20) que los ciudadanos tienen derecho a *“A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”* (derecho a la libertad de expresión) y a *“comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”*.

El ciudadano tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, pero en el ejercicio de este derecho se deben respetar los derechos de terceros, entre otros, los de propiedad intelectual. Igualmente, es importante resaltar que el derecho de información implica el derecho a recibir información veraz sobre los hechos noticiables, pero ello no quiere decir que bajo el paraguas de un derecho constitucional se vulneren otros. Una vez más se trata de encontrar mecanismos que aseguren el equilibrio entre unos y otros, garantizando la realidad y la efectividad de todos ellos.

Precisamente por eso, consideramos que es indispensable que también el reconocimiento de la protección de las creaciones intelectuales y de aquellos que las crean e intervienen en su creación, se recoja en el texto sometido a consulta.

Por otro lado, llama la atención que quede vagamente definido el punto 2 de este apartado un supuesto mandato dirigido tanto a los responsables de los medios de comunicación como a los responsables de entornos digitales, a los que se les exige la creación de unos determinados protocolos, con el objetivo de garantizar una información veraz, de calidad, etc.

La finalidad parece loable, pero en este sentido debe recordarse que la mayoría de los medios de comunicación cuentan con protocolos de actuación o políticas internas de cumplimiento y son perfectos conocedores de las obligaciones a las que quedan sujetos. Precisamente, ello asegura la fiabilidad y veracidad de la información que publican bajo su responsabilidad.

En cuanto al punto 3 del apartado XIII, este alude a procedimientos de retirada de contenido infractor. A este respecto, debemos recordar que estos procedimientos ya vienen regulados en la normativa vigente (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Ley orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, Ley de Propiedad Intelectual, entre otras).

## **SEXTA: SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DIGITAL**

En el punto 1 del apartado XV del documento sometido a consulta se hace referencia a los derechos que debe cumplir la educación digital a distancia. Esta incorporación a través de la que se pretende el acceso de todos los ciudadanos a la educación debería completarse con una mención expresa al respeto a los derechos de Propiedad Intelectual en este ámbito.

Hay que tener en cuenta que muchas obras se crean para ser empleadas como recurso educativo y que, sin el necesario respeto de las normativas correspondientes, también las relativas a propiedad intelectual, se generará un desincentivo a un sector muy importante como es el sector editorial español, la primera industria cultural del país.

El resultado será el empobrecimiento de la producción y de la oferta española, de tal modo que, en determinados niveles y ámbitos educativos, nuestros estudiantes podrían terminar utilizando textos y materiales producidos o editados en otros países y ajenos a nuestra realidad cultural, social e histórica.

## **SÉPTIMA: SOBRE EL ACCESO A LOS DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO.**

En el apartado XIX se mezclan aspectos de diferente naturaleza: datos (que pueden ser personales o no) e información (que puede ser información protegida o susceptible de protegerse por derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial, secreto empresarial o información confidencial).

Sin embargo, en este apartado parece que se obvia la heterogeneidad de todos estos activos y de su lectura puede entenderse que se apuesta por la libre reutilización de todos ellos.

Sin embargo, debe recordarse que, por ejemplo, nuestra Ley de Propiedad Intelectual exige que cualquier explotación de obras y prestaciones protegidas deba ser autorizada por su titular de derechos, sin más limitaciones que las establecidas en dicha Ley.



Nuevamente, como ocurre en prácticamente todos los puntos de esta carta, debe encontrarse un equilibrio entre todos los derechos e intereses en juego para conseguir el funcionamiento legal y sostenible de la red.

#### **OCTAVA: SOBRE EL ENTORNO DIGITAL SOSTENIBLE.**

El apartado XX hace referencia al entorno digital sostenible. Sin embargo, sería conveniente que se reflejen principios más elaborados que ayuden a avanzar en este objetivo ya que es vital para los sectores creativos.

De hecho, parecería que el documento se centra únicamente en los aspectos materiales relativos a dispositivos, eficiencia energética, etc., que son muy importantes, pero no los únicos.

En nuestra opinión, la sostenibilidad del ecosistema tecnológico exige que, además de lo anterior, se declare el necesario respeto a los derechos de propiedad intelectual de los titulares de los contenidos que circulan por la red.

Ello facilita también la calidad, veracidad, actualidad, etc. de los contenidos y de las informaciones que circulan por esas redes y a las que tenemos acceso a través de esos dispositivos.

En ese sentido, pensamos que incluir bajo este epígrafe una mención a estos aspectos sería también imprescindible.

#### **NOVENA: SOBRE LA LIBERTAD DE CREACIÓN Y EL DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA EN EL ENTORNO DIGITAL.**

Ambos derechos se encuentran ya reconocidos en la Constitución española y han sido reiteradamente interpretados y analizados por la doctrina y jurisprudencia. La incorporación de estos aspectos en el documento sometido a consulta no debe permitir generar ningún desequilibrio entre estos derechos y otros con los que conviven y que son merecedores de igual protección como, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. En este sentido resultaría interesante, a nuestro entender, incluir esta mención a la necesaria coexistencia entre derechos en una situación de equilibrio.

En lo relativo a la promoción del acceso a las obras en dominio público, queremos señalar que esta mención refuerza la garantía ya expresada desde hace años a través de la disposición adicional tercera de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo lo manifestado,

SOLICITO A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SOCIEDAD DIGITAL que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por formuladas observaciones por parte de CEDRO en el proceso de consulta pública de la denominada “Carta de derechos digitales”.

En, Madrid a 15 de diciembre de 2020